



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia definitiva

Expediente N° 1319 / 2024

**AUTOS: CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA c/
MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
s/IMPUGNACION DE DEUDA**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

VISTO Y CONSIDERANDO

Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA contra la resolución dictada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social n° RESOL-2022-19397 -APN-DRLF#MT de fecha 27 de septiembre de 2022, mediante la cual se impuso una multa a la Trabajo empresa relevada por la infracción al art. 40 de la ley 11.683 y sus modificaciones al constatar el incumplimiento del debido registro de alta del trabajador relevado, Sr. BORDON CRISTIAN RUBEN (CUIL 20349830966).

La recurrente alega que en el procedimiento impugnado se ha invertido la carga de la prueba lo que trajo como consecuencia que se haya arribado a una conclusión errónea. Sostiene que el Sr. BORDON CRISTIAN RUBEN no es empleado en los términos de la ley de contratos de trabajo, que no existió relación de dependencia entre dicho trabajador y la cooperativa de trabajo “Cazadores”, existiendo en realidad una relación cooperativa y que la misma se encuentra inscripta ante la AFIP y que la legislación aplicable es la 20.337 y no la Ley de Contratos de Trabajo. Arguye también que sus asociados tributan al sistema previsional como autónomos.

Desde el punto de vista procesal corresponde el análisis del recurso interpuesto pues por imposición del art. 44 de la ley 27.742, que modificó la anterior ley 19.549, el cumplimiento de una sanción pecuniaria no podrá ser exigido como requisito de admisibilidad del recurso judicial.

En cuanto al fondo el tema sometido a juicio, cabe destacar que las cooperativas de producción o trabajo son asociaciones de personas que se unen para producir bienes o prestar servicios y cuyo objetivo es mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales.

Se caracterizan por proteger la autogestión y la conducción democrática de la administración de la asociación y su finalidad es proporcionarles trabajo a sus asociados,



los que reciben una parte de los excedentes que genera la cooperativa siempre en proporción al trabajo realizado por cada uno.

En otras palabras, la actividad de dichas entidades es económica como la de cualquier otra asociación productiva pero, desde el punto de vista histórico, exceden dicho objetivo dado que, al estar formadas por trabajadores, también pretenden elevar las condiciones socioeconómicas de éstos.

La idea que mueve a dichas entidades es reemplazar la figura del trabajador asalariado por el socio cooperativista, dueño del capital y del trabajo, inserto en una organización horizontal, igualitaria y solidaria. Se ha señalado que las citadas asociaciones se originan en el propósito de evitar la explotación del trabajo manual o intelectual del hombre. Su objetivo no es favorecer sino suprimir, en lo posible, el trabajo asalariado, para sustituirlo por el trabajo en común, mediante una aportación libre del trabajo de todos –técnicos, empleados y obreros- contribuyendo de tal manera a la obtención de beneficios en los que participantes exclusivamente los que conjugan sus aptitudes y realizaciones, volcándolas a favor de la entidad. No se concibe, pues, la cooperativa de trabajo como una sociedad cerrada que instituya privilegios o reconocimiento de discriminación de cualquier tipo. No se la concibe tampoco guiada por un primordial espíritu de lucro, consagrada a la acumulación de capitales e intereses o gobernada por núcleos excluyentes, al modo de una empresa comercial que loca sin restricciones el trabajo de los individuos, allegándolos en relación de dependencia (ver CSJN, 24/11/09, “Lago c/Cooperativa Nueva Salvia Ltda”, Fallos 332:2614).

Es por ello que, en principio, se entiende que en una cooperativa de trabajo genuina, la calidad de socio excluye a la del trabajador dependiente lo que determinaría la inaplicabilidad de las disposiciones del art. 27 de la LCT (Rubio y Piatti, “Recursos de la seguridad social”, p. 231; Capón Filas, Rodolfo, “Derecho del”, ps 203/4; CNTr. Sala I, 20//01, “Mendoza c/Coop. de Trabajo Patagónica”, DT 2001-B-2109; Sala III, 22/7/01, “Guerrero c/Castellini”, DT 2002-508; Sala V, 28/12/01, “García c/Coop, de Lince”, LL 2002-D-275; Sala VI, 13/10/10, “Di Gregorio c/Coop. Trabajo de Cazadores Ltda.”, DT 2.011-9-2325”) pero las citadas cooperativas resultan entes permeables a situaciones de fraude laboral y con frecuencia se enmascaran bajo su estructura social, típicas prestaciones de carácter dependiente. Se ha entendido que si la cooperativa de trabajo actúa como simple proveedora de mano de obra en beneficio de terceros resulta alcanzada por la legislación laboral (ver Caubet, Amanda “Las cooperativas de trabajo. Un instrumento de fraude a la ley”, DLP 1999-XIII-85; CSJN, 10/10/17, “Pessina c/Luis Frisman y otros”, Fallos: 340:1414; CFSS., Sala II, 28/8/19, “Primer Corte Coop. de Trabajo Ltda c/AFIP”).

Lo anterior explica que el Poder Ejecutivo haya sancionado el decreto 2.015/94 cuyas directivas vedan la posibilidad de que las cooperativas de trabajo, para el cumplimiento de su objeto social, provean la contratación de los servicios cooperativos por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia definitiva

terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados. Por otra parte, no cabe olvidar que, en el campo del derecho social, rige el principio de primacía de la realidad puesto que el contrato de trabajo es un contrato realidad fundado en los hechos objetivos apreciables y, en caso de discordancia, debe darse preferencia a los hechos que fija la base fáctica de aplicación del derecho y no a lo expresado en los instrumentos suscriptos por las partes (Pla Rodríguez, “Los principios del derecho del trabajo”, p. 313; García Martínez, “Derecho del trabajo y de la seguridad sociales”, pág.295).

En el caso a estudio, según resultado del estudio de las constancias administrativas acompañadas, se atribuyó la condición de trabajador del Señor Bordón Cristian Rubén.

Que, al producir descargo en la instrucción sumarial del expediente 2022-66951410 -APNDSYCF#MT la empresa relevada como prueba sus dichos acompañando copia de inscripción del asociado relevado como así también el pago de aportes del mes correspondiente.

A su vez, también adjunte testimonio del estatuto social inscripto en INAES, copia del libro de registro de asociados donde consta registrado el Sr. Bordón, carta documento de aceptación del asociado a la entidad, comprobante de pago de aportes del asociado, copia de certificado de ANAES, declaración jurada del asociado, anticipo de retornos, convocatoria a asamblea suscripta por el asociado, constancia de asistencia a asamblea del asociado, política de seguro resolución INAES, credencial de obra social de los asociados, entre otras pruebas. en apoyo de su postura.

Planteada así la cuestión y habiéndose constatado que la apelante es una entidad legalmente inscripta, en los términos del régimen de cooperativas, entendiendo que lo resuelto debe ser dejado sin efecto ya que la presunción del art. 12 de la ley 19.549 (sustituido por el art. 33 de la ley 27.742) puede ser alterada por prueba contrario, y el hecho de que, durante el curso de la inspección, el Señor Bordón no se identifica como socio de la cooperativa constituye un dato insuficiente como para justificar una condena punitiva. Ello atento a que es deber del Estado llegar a la verdad material de los hechos acaecidos y ejercitar con prudencia sus facultades sancionatorias a los fines de no violentar el art. 17 de nuestra Carta Magna.

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal **RESUELVE** : 1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, 2º) Dejar sin efecto la sanción patrimonial aplicada, 3º) Sin costas por no haber mediado contradictorio.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.



NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

ANTE MÍ: SÁNCHEZ MOSCOSO JOSE MARIA

Prosecretario de Cámara

JSM

